

Mayor (R) Arturo Silva Valdés

El hombre que disparó a Berríos

El hombre que acaba de ser procesado como autor del homicidio de Eugenio Berríos formó parte del núcleo que ejecutó las operaciones más clandestinas del Ejército en los años 80 y en plena democracia. El oficial es dueño también de los secretos de dos de los hombres más poderosos de Chile: Augusto Pinochet y Agustín Edwards, dueño y director del diario "El Mercurio".

Por Mónica González

Publicado en la revista Siete+7, nº 33, 25 de octubre de 2002

Alto, atractivo, elegante, con don de mando, hombre de mundo, experto en inteligencia, tirador exímio, jugador de polo y rodeado de una aureola que le significó incluso el apelativo de "el James Bond chileno". Esas son algunas de las características que se le atribuyen al mayor (r) Arturo Rodrigo Silva Valdés, miembro del Servicio Secreto de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) y quien aparece identificado en al menos dos testimonios como el autor chileno - el otro sería uruguayo- de los disparos que terminaron con la vida del químico de la DINA Eugenio Berríos.

Pero Silva Valdés tiene otros atributos que contribuyeron a engrandecer su leyenda. Es dueño de los secretos de dos de los hombres más poderosos de Chile: Augusto Pinochet y Agustín Edwards, el director y dueño del diario El Mercurio.

De ambos fue jefe de seguridad personal, amo y señor de su retaguardia y desplazamientos.

El nombre de Silva Valdés ya era conocido en tribunales. Saltó a la palestra cuando el ministro Sergio Muñoz lo procesó como encubridor en el asesinato de Tucapel Jiménez. Pero su identificación se conoció en el corazón de la DINE antes de que fuera procesado. Y se tomaron medidas. Para entonces se desempeñaba como escolta personal de Agustín Edwards. Una función que abandonó abruptamente.

Una de los aspectos que restan por dilucidar en su historial es si efectivamente en septiembre de 1994 Arturo Silva fue enviado en comisión de servicio a trabajar para Agustín Edwards por el entonces director de Inteligencia del Ejército, general Eugenio Covarrubias. Porque después, cuando se produce su retiro de la institución castrense, su relación laboral con El Mercurio y con Edwards pasa a ser asumida por la empresa de seguridad Serprotec S.A.

Esta empresa tiene dos socios principales: Juan Luis Herrera Villena e Inversiones Canelo Seis y Compañía, cuyos socios principales son, a su vez, Agustín Edwards Eatsman, Agustín Edwards del Río e Inversiones Nacionales.

Valdés no llegó solo a trabajar para Edwards. Un grupo de hombres, todos formados en la CNI y en el reducido y selecto equipo del Servicio Secreto, lo acompañó. Entre ellos estaban Nelson Hernández Franco, quien en 1982 se desempeñaba bajo la chapa de "Marcos de la Fuente" en la CNI y que también fue procesado por el asesinato de Tucapel Jiménez; Marcelo Sandoval, Nelson Román e incluso una mujer: Erika Silva. Más tarde se incorporaría como jefe el mayor Eduardo Martínez Wogner, quien fuera ayudante del director de la CNI.

El general Eugenio Covarrubias seguía muy de cerca los pasos de la escolta de seguridad de Agustín Edwards. Y sus nexos se estrecharon cuando su hijo, también llamado Eugenio Covarrubias, asumió la gerencia de Serprotec, cargo que conservó hasta 1999.

No todo en la vida de este exclusivo experto en seguridad ha sido adrenalina y gloria. A sus más de 500 viajes por el mundo hay que contraponer la muerte de uno de sus hijos. Una herida que

lo desestabilizó y que lo dejó vulnerable para la vida. Hoy, a pesar de sus acciones en Ecogas Limitada, Ceqsachile S.A. y Consultsistem Chile S.A., su mundo vuelve a desplomarse.

Asesor VIP. Arturo Silva comenzó a destacarse por sus dotes en inteligencia a principios de los '80 cuando formaba parte de los escuadrones de la CNI. Hay quienes dicen que en ese entonces lo llamaban "Alvarito", haciendo la relación con Álvaro Corbalán, el poderoso jefe operativo del organismo de seguridad. Eran tiempos en que los vasos comunicantes entre la CNI y el DINE eran fluidos y difusos. Una relación que hoy algunos oficiales califican de "perversa" porque involucró al organismo de inteligencia institucional, destinado a la seguridad nacional, en operaciones criminales, como el asesinato de Tucapel Jiménez.

Hoy la jueza Olga Pérez investiga otro hecho similar y que podría acarrear graves consecuencias: el asesinato a través de toxinas botulínicas del ex Presidente Eduardo Frei Montalva. Su muerte acaeció días antes que un escuadrón del DINE asesinara a Tucapel Jiménez, en 1982.

Pero el tiempo de gloria de Silva llegó con ocasión del plebiscito de 1988. Ahí pudo desplegar todos sus dotes al convertirse en el principal "asesor de seguridad" del general Augusto Pinochet.

Su función se iniciaba al momento en que el general decidía hacer un viaje. Allí entraba en acción. Viajaba hasta el lugar escogido, se entrevistaba con los invitantes y con los organismos de inteligencia militar del país, hacía una completa revisión de las condiciones de los hoteles posibles para tener siempre al menos dos alternativos en caso de emergencia; los hospitales cercanos, los vehículos que se utilizarían, los choferes, ambulancia, chequeos y fichas médicas a la mano. Revisaba hasta el último detalle, incluyendo la selección de los hombres que integrarían su escolta de seguridad, y luego se sentaba junto a Pinochet y su edecán del momento para dar cuenta del programa elegido y afinar.

Su misión debiera haber terminado allí, pero fue tal la cercanía, la confianza y el afecto que Pinochet depositó en él, que se hizo costumbre que Arturo Silva Valdés se convirtiera en su sombra cuando el viaje se iniciaba. Al punto que en más de una ocasión, los hoteles donde se hospedó Pinochet quedaron registrados a su nombre. Así ocurrió en octubre de 1993, cuando el general viajó a Brasil de vacaciones y la prensa recogió que el ex dictador habría utilizado la falsa identidad de Arturo Silva Valdés en el Hotel Intercontinental de Río de Janeiro.

Para entonces Silva se había convertido en un agente ultra secreto del DINE. Un camino que inició en 1990 cuando fue elegido como uno de los brazos operativos de la operación "control de bajas", la salida clandestina del país de aquellos militares en peligro de ser encarcelados o procesados por secuestro, tortura u homicidio en tiempos de dictadura.

Así, Silva Valdés fue la pieza clave que operó en la fuga de Luis Arturo Sanhueza Ross y de Carlos Herrera Jiménez. Silva Valdés preparó esa operación viajando a Argentina el 7 de septiembre de 1991, volvió el 12 y volvió a salir el mismo día que Herrera: el 19 de septiembre de 1991. Fueron días intensos. Ya estaba decidida y preparada la fuga de Eugenio Berríos. Pero ésta fue revestida de todos los cuidados especiales: Berríos no debía caer en manos argentinas. Fue Arturo Silva quien preparó hasta el último detalle y cuando Berríos cruzó la frontera por el sur en dirección a Río Gallegos, el 26 de octubre de 1991, Silva hacía lo propio pero por vía aérea.

A partir de entonces controló cada uno de los pasos de Berríos en su nueva residencia. Y también los del otro "paquete" que mandó a guardar en Uruguay: Luis Arturo Sanhueza Ross.

La historia que sigue a esa fuga fue contada en la edición N° 32 de Siete+7. Pero hay un capítulo que vale la pena detallar. Cuando en noviembre del '92 Berríos escapó de sus custodios desde la localidad de Parque del Plata, a 50 kilómetros de Montevideo, Arturo Silva Valdés estuvo allí controlando paso a paso la captura de Berríos. Junto a él se encontraba el mayor Jaime Torres

Gacitúa, uno de sus mejores amigos y también “asesor de seguridad” de Pinochet y miembro del Servicio Secreto del DINE. Cuando finalmente recuperaron a Berríos, comienza la otra historia. Una que culmina -según los testimonios- con el asesinato del químico, el que habría sido ejecutado por Silva Valdés y el teniente coronel uruguayo Eduardo Radaelli. Testigo del crimen fue el mayor Torres Gacitúa. Allí quedaría sellado un pacto entre oficiales de inteligencia que revela que la “Operación Cóndor” sigue siendo un peligro latente.

Radaelli: el otro disparo

En 1993, cuando el escándalo del secuestro y desaparición de Eugenio Berríos estalló ante la opinión pública en Uruguay, provocando lo que se llamó “un golpe técnico” de los militares, el teniente coronel Eduardo Radaelli debió ser traído en emergencia desde Zaire, donde se hallaba en “misión de paz”.

Y si en un principio se pensó que el oficial sería castigado y procesado junto al teniente coronel Tomás Casella, muy pronto la presión militar dejó en evidencia que el Presidente Luis Alberto Lacalle estaba bajo tutela.

Han transcurrido nueve años. Radaelli sigue activo y hoy debe enfrentar una acusación de homicidio. Sabe que no está solo. Es considerado la cabeza “pensante” de un grupo de oficiales nacionalistas de inteligencia del Ejército uruguayo que se nuclearon en torno al ex comandante en jefe, teniente general Fernán Amado. En la época del escándalo de Berríos, Amado era jefe de Intendencia del Ejército.

En ese mismo grupo cerraban filas Casella y otro de los involucrados en el secuestro y asesinato de Berríos: el teniente coronel Wellington Sarli. Los tres oficiales no son desconocidos en Uruguay. Están vinculados a actos de terrorismo de Estado durante y después de la dictadura. En especial, a una serie de atentados perpetrados en contra de disidentes a fines de los '80, los que incluyeron una bomba en el estudio jurídico del entonces Presidente Julio María Sanguinetti.

Al grupo se lo conoció por el nombre “Guardia de Artigas”, un colectivo que nació al amparo de una logia mayor y más poderosa -“Tenientes de Artigas”-, pero bajo un perfil más clandestino. La trastienda de la pugna de poder de entonces hizo enfrentarse al general Amado con Sanguinetti. Más tarde, cuando estalló el escándalo Berríos, las trenzas volvieron a disputarse el poder. Según testimonios de oficiales chilenos, una presa que estuvo al centro de la disputa fue la producción de armas químicas que Berríos habría comenzado a realizar para sus custodios uruguayos. Lo cierto es que Amado denunció escuchas telefónicas. Responsabilizó al director de Inteligencia, general Aguerro, el que finalmente debió pasar a retiro. Ahora las nuevas trenzas se mezclan con las viejas y actuales luchas en una pugna por el poder y la impunidad. Y Radaelli está en el centro del huracán.

Servicio Secreto bajo impronta británica

El traspaso de la banda y la piocha que simbolizan el poder presidencial que el general Pinochet hizo a Patricio Aylwin el 11 de marzo de 1990, dando inicio a la transición, fue el detonante para otros movimientos en las sombras. A poco andar la auditoría del Ejército, a cuya cabeza estaba el general Fernando Torres Silva, tocó la campana de alerta.

Según un alto oficial del Ejército de la época, fue con instrucciones precisas del alto mando que se realizó la primera reunión entre la auditoría y el director de Inteligencia de la institución, más el jefe del Servicio Secreto que dependía del DINE, en la que se hizo un minucioso análisis de

qué juicios estaban “maduros”: qué procesos estaban en peligro de obtener la identificación de torturadores, secuestradores y homicidas uniformados.

Fue en ese núcleo que se diseñó la estrategia para sacar de Chile a los militares “en peligro”. Y el brazo operativo fue precisamente la joya inexpugnable y más compartimentada del DINE, el Servicio Secreto que durante largos años dirigió el oficial Maximiliano Ferrer Lima y que se creó bajo la asesoría del MI6, el Servicio Secreto de Gran Bretaña bajo el acicate de la invasión inglesa a Las Malvinas en 1982.

Esa unidad quedó al descubierto en el curso de la investigación del asesinato del líder sindical Tucapel Jiménez, desarrollada por el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Sergio Muñoz. Pero ha sido la investigación de la jueza Olga Pérez sobre el asesinato del químico Eugenio Berríos la que ha permitido develar la identidad de sus miembros así como la ejecución de otras operaciones de corte criminal llevadas a cabo por el grupo.

Según declaraciones del brigadier Víctor Pinto Pérez, jefe del Comando de Inteligencia del Ejército (CIE), a mediados de 1982 -la invasión a Las Malvinas se produjo en abril- escogió a un pequeño grupo de oficiales de inteligencia para que viajaran a Gran Bretaña y allá se interiorizaran del funcionamiento del MI6 para crear en Chile una unidad de corte similar, claro está que guardando las proporciones.

Fue el mayor Maximiliano Ferrer Lima (oficial que jugó un importante rol en la DINA como el “capitán Max”) uno de los fundadores del Servicio Secreto del Ejército en su calidad de jefe de la Unidad de Contraespionaje del CIE.

¿Por qué incorporar al Servicio Secreto, destinado a la misión de blindar la seguridad territorial, en actividades de encubrimiento de asesinos y torturadores? Esa es la pregunta clave que hoy deben responder los responsables de una gestión fracasada. Porque un somero análisis de las operaciones de fuga llevadas a cabo el '91 permite concluir que todas ellas fracasaron. Y principalmente, por los engaños y desaciertos en que incurrieron los hombres encargados del “control de bajas”.

Así sucedió con Luis Arturo Sanhueza Ross, con Carlos Herrera Jiménez y con Eugenio Berríos. No sólo no pudieron eludir a la justicia sino que terminaron enlodando a la institución y de paso comprometiendo incluso la seguridad nacional.

Si hubiesen declarado en su momento ante los tribunales el Ejército ya habría dado vuelta esa página y sin ninguno de los costos en dinero, imagen y vulnerabilidad para la seguridad nacional. También, y es un hecho no menor, todas esas operaciones significaron un millonario gasto financiero y terminaron anidando focos de corrupción que hasta hoy no han sido investigados. Algunas preguntas a modo de ejemplo: ¿a quién rendía cuenta Arturo Silva Valdés de los gastos en que incurría para pagar pasaportes falsos, viajes múltiples y estadía de los custodios y los fugados en el extranjero? ¿De dónde salían esos fondos? Y si es efectivo que el gas Sarin y otras toxinas mortales se vendieron a Irak o a otros países a fines de los '80, ¿cuántos millones de dólares se recibieron y en qué cuentas se depositaron?